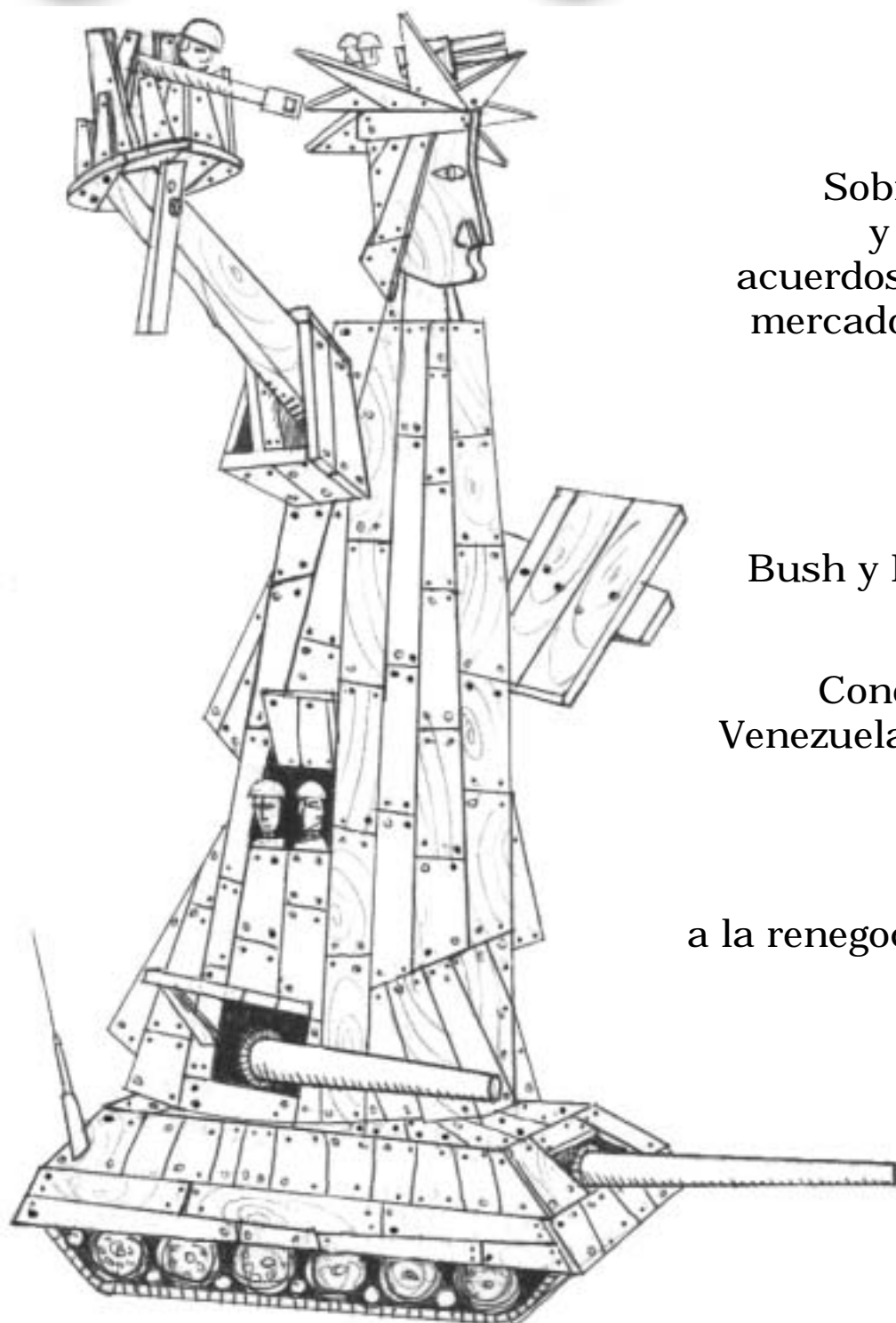


Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

FEBRERO DE 2005

AÑO IV • N° 56



Situación mundial

Sobre el orden de las cosas
y las cosas de ese orden:
acuerdos y conflictos en torno a
mercados, política y seguridad.

América latina

Bush y Rice contra las “fuerzas
negativas de la región”

Cono sur: El conflicto entre
Venezuela y Colombia, y la doble
protesta boliviana

Argentina

Del canje de la deuda
a la renegociación de los contratos

Aguas Argentinas S.A.:
el negocio del *oro azul*

Situación Mundial

El orden: elementos generales

5 Pelea por las ganancias

El orden: contradicciones económicas

6 Coyuntura política

¿“Imperio” o república de la burguesía?

7 Seguridad

El difícil arte de exportar democracia

8 Conflicto social

La deslegitimación no encuentra sus cauces de acción

América Latina

9 Coyuntura Política

El ALBA como alternativa política y económica: Venezuela y Cuba.

EE.UU. y los países del “eje del mal” de la región.

El conflicto Venezuela-Colombia y los primeros avatares de un conflicto mayor.

El Foro Social Mundial

14 Conflicto Social

Bolivia: protesta social por un lado y autonomía por otro.

Argentina

15 Pelea por las ganancias

Abandonando el default (de una deuda impagable)

Cercando a las privatizadas

El negocio del agua

La impotente burguesía local: control sin estatización

21 Coyuntura política

Tras el intercambio de golpes, “duhaldismo” y “felipismo” se distancian para medirse.

21 Conflicto social

Análisis de Coyuntura

Revista Mensual
Febrero de 2005
Año IV • Nº 56

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Fuentes consultadas: EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ); *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP) – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (Un) – Colombia: *El tiempo* (Et) – Bolivia: *Los tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

Números anteriores: www.geocities.com/informecon

En este número

En el discurso de su reasunción, George W. Bush afirmó –tras un breve racconto histórico desde la posguerra pasando por la caída de la URSS hasta los atentados del 11 de septiembre– que: “*Los hechos y el sentido común, nos llevan a una única conclusión: la supervivencia de la libertad en nuestra tierra depende cada vez más del éxito de la libertad en otras tierras. (...) Por lo que la política de los EE.UU. es buscar y apoyar el crecimiento de movimientos e instituciones democráticas en cada nación y cultura, con la meta final de terminar con la tiranía en nuestro mundo.*” Bellas palabras, su destinatario principal es su público doméstico, desinformado a mares gracias a esos medios masivos de comunicación que analizamos en nuestro número anterior. (Por poner sólo un ejemplo, antes de las elecciones, tres de cada cuatro estadounidenses sostenían que no debió invadirse Irak si éste no poseía armas de destrucción masiva o proveía apoyo a Al Qaeda; el hecho de que todavía la mitad sostuviera que la invasión fue correcta, se basa en que esa mitad aún cree que Irak dio apoyo sustancial a Al Qaeda y tenía armas de destrucción masiva o al menos un programa importante para producirlas. No casualmente, esas creencias erróneas tienden a concentrarse entre la audiencia de Fox News, propiedad de Murdoch).

Pero finalmente, ¿de qué se trata en realidad esa preocupación por *otras culturas y naciones* por parte del presidente de EE.UU.? Se trata en resumidas cuentas, de la escala cada vez más global de la actuación del capital, que lo lleva a quebrar con los espacios e instituciones nacionales dentro de los que se desarrolló históricamente. Esa escala global implica intereses y necesidades globales para el capital más concentrado, y allí estarán sus representantes políticos para hacerlos avanzar todo lo posible, contribuyendo a crear un orden global acorde con sus necesidades. De los elementos centrales de ese orden y de los medios para implantarlos tratará Situación Mundial.

Por supuesto que esa política no avanza sin obstáculos. Además de los que son propios de las divergencias entre las distintas burguesías con aspiraciones globales, fracciones de menor alcance consiguen imponer a *los grandes* una discusión que pareciera inconcebible dada la disparidad de los contendientes. Pero así es y vale como ejemplo el caso sudamericano: un unión de diversas fuerzas políticas nacionales impuso a la potencia hegemónica la postergación del ALCA.

Desde ya que la fuerza de esta contrahegemonía no reside en su homogeneidad. Por un lado, incluye al chavismo que plantea una opción política y económica completamente contraria al ALCA con la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), proponiendo una integración para el desarrollo que satisfaga las necesidades de sus pueblos y sostenga su soberanía e independencia. Y se asocia en esta iniciativa con Cuba, excluida por principio de las negociaciones por el ALCA. Por otro lado, también suma a esta contrahegemonía la fuerza política gobernante en Brasil, parte de cuyas contradicciones quedaron visibles este mes de enero durante el Foro Social Mundial en Porto Alegre: Lula participó en él para partir luego a Davos al Foro Económico Mundial –en oposición al cual surgió el Foro Social.

Nuestro país también forma parte de estas fuerzas y se ven en él las mismas contradicciones. Y si el gobierno puede mostrar el apoyo unánime de la burguesía con intereses en el país para el canje de los bonos en default, no parece ocurrir lo mismo con la disputa en torno a los servicios públicos privatizados. Esta pelea va pasando a primer plano, y con ella la búsqueda de un delicado equilibrio: controlar las concesiones sin recurrir a la estatización, que sería *ir en contra de la historia* según notorios representantes de la burguesía más concentrada.

Veremos un poco de todo esto...

Situación Mundial

Los economistas suelen presentar los procesos económicos como dotados de cierto carácter autorregulado que parece emerger de unas leyes tan imperativas como las que rigen los fenómenos físicos y que, sin embargo, resultan constantemente asediadas por disrupciones “no económicas”. Las *externalidades* (desde catástrofes naturales hasta guerras, y también la desigual distribución territorial de recursos) y las *distorsiones* (de raíz “política”) forman parte del vocabulario clásico de la economía política; su aparición incesante en el discurso de los economistas burgueses demuestra por el absurdo el carácter *constructo* de las condiciones que posibilitan la acumulación. Las relaciones sociales que están en la base de un modo de producción no son hechos dados: deben ser mantenidas, recreadas, parcialmente reformuladas. La acumulación de capital necesita de un orden.

Idealmente, esta acumulación se concibe como un proceso dotado de cierta estabilidad, producto de condiciones específicas: normas jurídicas que sancionen la libre disponibilidad de excedentes (“seguridad jurídica”), escasas variaciones a corto plazo en el esquema de precios relativos que permitan un cálculo racional inversión-beneficio (íntimamente vinculado a la tasa de cambio), y, ante todo, un sistema político capaz de garantizar, mediante el uso combinado de la coerción y el consenso, el mantenimiento de la propiedad privada como núcleo de las relaciones sociales (“governabilidad”). En el Estado se cristalizan estas condiciones, aún cuando la expansión de las funciones estatales (imperativo de gobernabilidad en condiciones de pleno empleo) sea a menudo caracterizada por los cuadros de la burguesía como un freno al proceso de acumulación (en la actualidad y en condiciones de desocupación consolidada).

El logro y mantenimiento de estas condiciones nunca ha sido fácil, ni siquiera en el marco de los espacios de acumulación nacionales. El panorama se complica aún más cuando, por obra de un desarrollo de las fuerzas productivas y en especial de las comunicaciones, el proceso de acumulación entero es susceptible de realizarse a escala global. En este caso nos encontramos frente a la necesidad de algún tipo de integración (o, como mínimo, coordinación) interestatal que repita, a escala ampliada, el proceso por el cual los sistemas legales y monetarios y las solidaridades políticas regionales decantaron en sistemas y solidaridades nacionales desde el siglo XVIII. La consolidación de mercados nacionales y la postulación de “intereses generales” de la nación (cuyo sujeto es el ciudadano) se presentan ahora a escala ampliada en

tanto los antiguos marcos operan como un freno al proceso de acumulación global.

La tarea no es sencilla, ya que implica desmontar en buena medida identidades e intereses que la misma burguesía construyó en el pasado en torno a los “estado-nación”, coordinar la evolución de las divisas nacionales, gestionar la evolución de los espacios de acumulación subordinados. El “orden” global tiene, sin embargo sus precedentes históricos. El período previo a 1930 tuvo su sistema de patrón-oro y su reparto de áreas de influencia (Asia, África, América Latina) aunque eclosionara como resultado del juego de “suma cero” entre naciones industrializadas. La segunda posguerra tuvo su sistema de Breton Woods y su división del mundo entre los bloques de la guerra fría, y posibilitó las tasas de crecimiento de la economía capitalista más grandes del siglo, hasta encontrar los límites de un proceso desarrollado fundamentalmente en el marco de espacios de acumulación cuya articulación se daba primordialmente en el comercio exterior.

Los estado-nación, por ser el ámbito de aplicación histórico de los elementos del “orden” burgués, constituyen aún hoy el campo primario de lucha entre las clases y de conflicto al interior de la propia burguesía, y la plataforma de lucha de la burguesía como sujeto mundial: por eso los conflictos intercapitalistas a escala mundial suelen tomar forma de lucha interestatal. Pero la realización de la burguesía como sujeto mundial sólo es posible actualmente mediante el proceso de romper con los límites de estos espacios

El orden: elementos generales

Se trata aquí de abordar propuestas de organización (no absolutamente nuevas pero sí en alza), que constituyen los elementos nucleares del consenso de la burguesía como sujeto mundial.

1. En primer lugar, lo que podríamos denominar una “globalización selectiva”, una mercantilización a escala mundial de los factores que intervienen en el proceso de acumulación. La incesante ampliación de la producción impulsa a la consolidación no sólo de un mercado mundial de bienes sino también de un espacio mundial de acumulación regulado idealmente por las “fuerzas del mercado”. La libre circulación de bienes, servicios e inversiones que propugna la Organización Mundial del Comercio - OMC (ver Análisis Nº 50, Agosto de 2004), y la tan reclamada “seguridad jurídica” para las propiedades, se complementan con el desmantelamiento de los “estados de bienestar” al interior de los distintos espacios de acumulación. La asignación de recursos (incluida la fuerza de

trabajo) se libera a las fuerzas de la oferta y la demanda: de este modo, la declinación por parte del Estado de su rol de garantizar, al menos parcialmente, la reproducción de la clase trabajadora, permite no sólo insertar el precio de la fuerza de trabajo en una nueva y desfavorable relación de precios, sino también liberar para el capital privado espacios antes de gestión estatal. El carácter consensual de este tipo de iniciativas para la burguesía del llamado G8 (países más industrializados del planeta) puede ilustrarse con distintos casos nacionales:

En los EE.UU., Bush inauguró su segundo mandato con un objetivo clave en política interna: la reforma del sistema de pensiones que data de 1935. El ejecutivo propone privatizar un porcentaje (entre el 2.5 y el 6%) de los aportes (actualmente del 12,4% de los salarios) destinadas al sistema. El semanario *The Economist* saluda la medida como “*uno de los logros más significativos para un gobierno conservador en la historia (...) un New Deal Republicano*” en tanto permitiría “*abrir la puerta para reformar enteramente otros programas*” (TE 13/01) en referencia a los seguros médicos. De hecho, la privatización parcial supone la quiebra del sistema por la baja de aportes, y, a mediano plazo, su necesaria privatización total.

- En Alemania entró en vigor, el 1º de enero, el paquete de leyes conocido como Hartz IV, que el canciller Schroeder califica como “*la mayor reforma social desde la posguerra alemana*” (NE-EL 2/1). Hartz IV decreta que la mayor parte de los antiguos receptores de la seguridad social pasen a engrosar la lista de los desocupados. Esto implica que deben aceptar empleos (aún de menor categoría) gestionados por agencias privadas, si no quieren ver suprimida la prestación. Luego de un año de desempleo, pasan a ser considerados “de larga duración” y a cobrar un seguro de algo más de 300 euros al mes (un obrero industrial promedio gana 1.500). Schroeder anunció en la Cumbre de Davos su intención de elevar la edad jubilatoria a 65 años (LF 29/1), algo similar a lo operado en Francia en 2004; en este último país, el primer ministro se halla empeñado en imponer mayor flexibilidad a la jornada laboral de 35 horas semanales.

- En Rusia entró en vigencia una reforma que convierte en pagos servicios antes gratuitos para los jubilados (transporte), y suprime rebajas en servicios esenciales (agua, luz, calefacción) (EP 15/1).

Nos referíamos a este tipo de globalización como “selectiva”, porque en tanto postula la libre circulación de cosas, no incluye la de las personas portadoras de la fuerza de trabajo. La UE ilustra esta aparente paradoja cuando, a la vez que estipula estrictos requisitos de garantías para el capital en los países de

reciente o próxima incorporación, permite a los países miembros ejecutar toda una batería de salvaguardas para evitar la “invasión de extranjeros” (ver Análisis N° 45, Febrero de 2004). Las relaciones de EE.UU. y México en el NAFTA tienen un carácter similar (aunque Bush proyecta facilitar las cosas a los indocumentados, aparentemente con la intención de erosionar el poder sindical). Evidentemente, la disparidad del costo de la fuerza de trabajo en distintos espacios nacionales de acumulación favorece al gran capital, dotado de recursos financieros que le permiten deslocalizar, lo que le proporciona una ventaja de costos respecto a las fracciones menores. A largo plazo, sin embargo, la tendencia debería ser la del ajuste de la brecha de costos salariales entre países “centrales” y “periféricos”, por obra de un doble proceso económico: desocupación y depresión de salarios en los primeros, crecimiento del empleo en los segundos.

2. La construcción de un espacio de acumulación de escala mundial, y la creciente penetración del capital en espacios no centrales, pero estrechamente relacionados (en buena medida por el mismo carácter fraccionado del proceso de producción “deslocalizado”), implican un intento de implantación de los elementos centrales del “orden” en los espacios penetrados. Las “dictaduras amigas” del periodo de posguerra, en el cual el capital industrial norteamericano o europeo incursionaba en espacios económicamente protegidos para beneficiarse de sus mercados internos, ceden paso a las democracias tuteladas, presumiblemente capaces de garantizar el desplazamiento de capitales y de dotar de cierta estabilidad, producto del consenso, a los distintos espacios interconectados¹. El control diplomático-militar adquiere mayor urgencia en aquellas áreas claves desde el punto de vista de la generación de recursos básicos como la energía (Medio Oriente, el Cáucaso y el entorno ruso) pero también en casos en que se detecta un potencial contrahegemónico (Cuba, Venezuela) y/o desestabilizador (Irán, Zimbabwe, Burma-Myanmar, la ex Yugoslavia en los 90). Una vaga caracterización

¹ La UE puede proveer un buen ejemplo histórico de desarrollo de un sistema interestatal integrado de este tipo: originalmente un *cartel* para la producción de ciertos insumos industriales básicos (carbón y acero), evoluciona luego hacia la homologación de condiciones de acceso a los mercados (Mercado Común, y en los 90, moneda única), para luego delimitar según criterios de libertad económica y política aquellos que están en condiciones potenciales de integrarse (expansión hacia el Este) y aquellos de quienes la UE debe estar en condiciones de defenderse (espacios que son objeto de la Política de Seguridad Común, todavía en proceso de consolidación).

de los “estados renegados” los ubica entre aquellos que no gozan de instituciones representativas, aunque en sus versiones más extremas los “exportadores de democracias” pueden echar mano a las “vinculaciones con el terrorismo” (desde el terrorismo islámico a las FARC colombianas), lo que de paso les evita la incómoda comparación entre los *stándares* de democracia de Irán y, por ejemplo, Kuwait (un “estado no renegado”, evidentemente).

La caracterización del enemigo se proyecta a su vez al interior de los estado-nación: el “terrorismo” funciona como catalizador de variados grados de disidencia de tipo interno. En los EE.UU., el deterioro, en nombre de la “seguridad”, de los derechos civiles, tuvo en estos días una especie de coronación cuando el gobierno propuso como Fiscal General a un ex integrante de la Corte de Justicia de Texas que justifica la tortura y caracteriza de “obsoleta” la Convención de Ginebra que regula el trato a los prisioneros de guerra (BBC 6/1). En Reino Unido, el gobierno se vio obligado, por un fallo del Tribunal Supremo, a declinar de la detención indefinida de 12 extranjeros sospechosos de terrorismo, que estaban sujetos a una ley antiterrorista sancionada luego del 11 de septiembre de 2001 (BBC 26/1).

Puede argumentarse que no se trata de elementos nuevos: la política del garrote es apenas menos vieja que el capitalismo; el recurso al enemigo externo como instrumento de disciplinamiento interno es carac-

terístico del macarthismo de los años 50; el asedio al “estado de bienestar”, así como la globalización centrada en el sistema financiero mundial, data, cuando menos, de la llamado “revolución conservadora” de los 80. Sin embargo, las condiciones en que se intenta delinear este nuevo orden mundial son diferentes a las de la última posguerra. Los EE.UU. poseían en la década del 60 una abrumadora hegemonía militar al interior del bloque occidental, y a la vez representaban un 40% de la economía mundial. Entre 1960 y 1981 el saldo de sus transacciones externas era positivo. Lideraba claramente el bloque de la burguesía mundial en oposición a otro bloque que se postulaba como anticapitalista. Todos estos hechos minimizaban (no eliminaban) el potencial conflicto resultante de los intereses contradictorios de las burguesías localizadas en naciones subordinadas del mismo bloque. Actualmente, los EE.UU. conservan claramente su superioridad militar, pero ya no representan más que el 25% del PBI mundial y su comercio exterior fue persistentemente negativo desde 1981 (con la única excepción del año 1991) (C 2/1). Las relaciones “económicas” de fuerza se han alterado, y ya no existe la URSS, ni el reparto geoestratégico de áreas de influencia que emanaba de la “guerra fría”. El capitalismo ganó la guerra fría: la lucha por los despojos (las contradicciones intercapitalistas) juegan ahora un papel central.

Pelea por las ganancias

El orden: contradicciones económicas

La contradicción fundamental es la que se da entre la socialización de la producción (interdependencia creciente de los productores en sentido amplio) y la apropiación privada del excedente (que se incrementa junto con el mayor éxito en producir plusvalía relativa y su correlato, la concentración). A grandes rasgos, esta contradicción opera ampliando la brecha entre burguesía y proletariado. La patronal alemana, no conforme con las reformas introducidas en la Agenda 2010 (ver Análisis N° 38, Julio de 2003) presiona al gobierno para facilitar el despido y eliminar la cogestión empresarial (uno de los pilares del sistema de posguerra). Y sin embargo, los beneficios empresariales, descontando inflación, han aumentado un 60% desde 1993 (EP 7/1).

Sin embargo, esta contradicción también limita el potencial desarrollo de las fuerzas productivas, socavando el mismo proceso de acumulación general a largo plazo. En Alemania, los recortes de ingresos a los trabajadores, desocupados y jubilados profundizan la baja del consumo; el gobierno responde con

recortes de impuestos que, en tanto profundizan el déficit fiscal, comprometen la estabilidad de la moneda comunitaria, tal como se desprende de los ácidos cruces del gobierno alemán con los ortodoxos del Banco Central Europeo con respecto al Pacto de Estabilidad (ver Análisis N° 41, Octubre de 2003). Otro ejemplo lo constituye la imposibilidad de concertar un “pacto energético”, basado en la restricción del consumo de combustibles, con el fin de estabilizar el precio del crudo. Los intereses inmediatos de ramas claves (energía y automotrices) bloquean toda posibilidad de esta iniciativa que obedecería, sin embargo, a los intereses estratégicos de largo plazo de la mayor parte de la burguesía europea y norteamericana (TE 13/1).

Por otra parte, las fronteras nacionales, que en un sentido general obstruyen la construcción de un mercado (y un orden) de tipo mundial, también operan como retaguardia para aquellas fracciones del capital que presionan a los gobiernos de sus áreas de localización para escapar de una competencia que se les presenta desfavorable. Los esfuerzos iniciados en

2001 en Doha en el marco de la OMC (ver *Análisis* N° 50, Agosto de 2004) se encaminan hacia un casi seguro fracaso ante la negativa de los EE.UU., Corea, Japón y la UE de eliminar los subsidios a su producción agrícola (TE 13/1). Las causas cruzadas entre la UE y los EE.UU. en la OMC bajo la acusación ayuda estatal “desleal” (acero, semillas genéticamente modificadas, plátanos, textiles, aeronaves de pasajeros) constituyen otro ejemplo. Un caso extremo es lo que se presenta como conflicto entre estados-nación respecto a la política en Medio Oriente, que se centra no sólo en el tipo de “gestión” de las crisis sino especialmente en el uso, por parte de una potencia abrumadoramente hegemónica en el plano militar (EEUU), del recurso a las armas con el fin no sólo de disciplinar o eliminar fracciones irreductibles sino de desplazar a capitales extranjeros de mercados y recursos. El capital francés, ruso y alemán fue literalmente barrido de Irak luego de la intervención anglo-norteamericana de 2003.

Los intereses divergentes de las distintas fracciones del capital estallan al interior de los mismos espacios de acumulación. La capacidad imparable de penetración del textil chino motiva diferentes respuestas al interior de los espacios de acumulación “invadidos”. En la UE, los gobiernos de países con fuerte producción de textiles (Italia, Francia y su lobby Euratex) piden la aplicación de salvaguardas para el sector, ante el levantamiento de las cuotas que opera desde el 1 de enero (TE 27/1). Alemania, en contrario, impulsa la apertura comercial de la UE a China: su fortaleza en los rubros de maquinaria especializada y equipamiento para generación eléctrica le han permitido triplicar sus exportaciones a China entre 1998 y 2003 (EL NE 16/1, datos de Eurostat, agencia europea de estadísticas económicas). En los EE.UU., Wall Mart, a la cabeza de los grandes supermercados, se opone a la aplicación de las salvaguardas introducidas por el tratado de 1999 (que prelude el ingreso de China a la OMC), por otra parte reclamadas por empresarios textiles y sindicatos (LF 29/11/2004).

Coyuntura política

¿“Imperio” o república de la burguesía?

El proceso de intento de resolución de dichas contradicciones se expresa en “modelos” de orden mundial capitalista, cada uno de los cuales plantea distintas relaciones de fuerza entre los espacios de acumulación que constituyen el núcleo de la economía capitalista mundial.

- El segundo mandato de Bush promete reafirmar el “doble unilateralismo” neoconservador: unilateralismo en política exterior, pero también en el manejo de la divisa. El nombramiento de Rice a la Secretaría de Estado, quien declaró que “*Hay aún avanzadas de tiranía con personas oprimidas en cada continente... en Cuba, Burma, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Zimbabwe (...) no podemos descansar hasta que cada persona que viva en una “sociedad del miedo” halla ganado su libertad*” (BBC 19/1), el mantenimiento de Rumsfeld en el Departamento de Defensa (autorizado por decretos presidenciales a realizar acciones encubiertas por fuera de la estructura de la C.I.A., cuyas operaciones en el extranjero deben ser informadas a comisiones del Congreso), ilustran la decisión de continuar (e incluso profundizar) las orientaciones de política exterior del primer mandato. La renuencia a controlar el déficit fiscal (que presiona a la baja el dólar) e incluso incrementarlo con partidas extraordinarias para las guerras de Irak y Afganistán (que por una fantasía contable no se asientan en el presupuesto) y más rebajas fiscales, determinan una relación de cambio que enerva especialmente al capital europeo, situado en

un movimiento de tijera entre caída de las exportaciones y baja del consumo interno. La ausencia de un sistema de autorregulación de las divisas (como fue el del patrón oro a principios del siglo XX) o de equivalencias relativamente fijas (como el del sistema de Bretón Woods en la segunda posguerra) no es un escollo menor para la estabilidad de un orden consensual. El papel clave del consumo norteamericano en la economía mundial y el que se asiente sobre una indudable supremacía bélica sostienen (todavía) la demanda de dólares por parte de las burguesías europea y oriental. El gran interrogante es hasta cuándo.

- Los restantes miembros del G8 tienden a postular distintas alternativas de tipo “consensual” con escaso grado de articulación. Los matices pasan por la instancia de concertación de la burguesía, elecciones que parecen depender de las orientaciones en política exterior y del grado de fuerza para imponerlas. El gobierno británico propone encarar las contradicciones en el seno del mismo G8 (que preside este año). La rama del el Partido Demócrata a la que pertenece el expresidente Clinton reclama “*volver el rostro a los socios de la OTAN*” (LF 15/11). Francia apela a un consenso ampliado en el seno de la ONU. Es sugestiva la inclinación de los principales líderes europeos hacia lo que se da en llamar el “poder blando”, la capacidad de penetración ideológica de las “democracias avanzadas”, resultante de su capacidad de gestionar y publicitar iniciativas “humanitarias”. El Foro de Davos, que se realizó a fines de este mes, tradicio-

nalmente la cita anual en la cual líderes políticos y empresarios pontificaban acerca de las bondades de la libre empresa y la desregulación económica, se ha visto inundado este año de mesas tales como “*Buscando el balance entre la competencia global y la regulación nacional*” (LF 28/1). Los problemas mundiales más urgentes a resolver, según la votación de un grupo de 700 ejecutivos fueron: Pobreza, Globalización equitativa, Cambio climático, Educación, Medio Oriente y Gobernabilidad mundial. “*Los empresarios constatan, sobre todo, un retroceso general del Estado, privado de recursos, y una ineficacia culpable por parte de los políticos (...) La naturaleza tiene horror al vacío, y es natural que los empresarios ocupen una parte del terreno. Quizás estén defendiendo sus propios intereses al tratar de evitar que el mundo se parta en dos, la alta tecnología por un lado, África del otro.*” (LM 30/1). A Davos llegó Tony Blair, que ofreció su versión del “poder blando”: preocupación por el dete-

riorio del medio ambiente, ayuda a los africanos, condonación de deudas de los países más pobres. El gobierno francés, por su parte, insistió con la aplicación de una tasa a las transacciones financieras internacionales cuyos fondos se destinarían a la lucha contra el Sida. Sugestivamente, los EE.UU. no enviaron (a excepción de Zoellick) personal político de primer nivel. El politólogo conservador Joseph Nye deplora esta orientación del gobierno de Bush y aporta, de paso, una terminología precisa para su caracterización: “*El gobierno de EE.UU. gasta 450 veces más en poder militar duro que en poder blando (...) Los anuncios previos de Bush de mayor ayuda para el desarrollo y para combatir el Sida en África fueron no sólo imperativos morales sino también inversiones importantes en poder blando para los EE.UU. Pero desgraciadamente los fondos no han fluido tan rápidamente como la retórica.*” (C 23/1).

Seguridad

El difícil arte de exportar democracia

Señalábamos antes que el segundo mandato de Bush parece dirigirse a consolidar lo que el semanario *The Economist* califica como “*una revolución en política exterior*” (13/1), cuyo epicentro es, evidentemente, la remodelación política del Medio Oriente. A fines de este mes las cosas parecieron encaminarse, en parte, en Irak y Palestina, con una asistencia inesperadamente alta a los comicios en Irak y la reanudación del diálogo palestino-israelí. Los límites concretos de estos pequeños “triumfos” ilustran el callejón sin salida de la política norteamericana en la región. En el primer caso, el éxito relativo de los comicios sin duda opera como un bálsamo luego del caos de los últimos meses. “*El número de ataques sobre americanos es cuatro veces mayor que hace un año; la tasa de mortandad se duplicó (...) Oficiales americanos reconocieron que sufren un promedio de 70 ataques diarios.*” (TE 27/1). Pero, en el mejor de los casos, la nueva Asamblea no puede sino reflejar la preeminencia *chiíta*, lo que constituirá un obstáculo difícil de franquear para los proyectos de agresión al vecino Irán, epicentro del poder *chiíta* en Medio Oriente. En el caso de Palestina, y a pesar del sostén norteamericano del “moderado” Abbas, sucesor de Arafat, la victoria arrolladora de las listas de Hamas para los comicios municipales en la zona de Gaza (BBC 28/1) marca la imposibilidad de avanzar en las negociaciones sin el planteo de la retirada de las fuerzas israelíes de la zona.

Y las diferencias en política exterior con su principal bloque competidor, la UE, parecen profundizarse. A los cortocircuitos en el tema Medio Oriente (anuencia al desarrollo nuclear “pacífico” de Irán en

el seno de la Agencia Internacional de Energía, oposición cerrada a la construcción del muro israelí en Palestina) se sumó anuncio del pronto levantamiento del embargo de armas no convencionales a China, que habían decretado las autoridades europeas en 1989 como represalia por la masacre de Tiananmén. El canciller británico (Reino Unido era el principal sostén de la medida) anunció el 21 de enero la decisión, que contraría los intereses de EE.UU. en el Lejano Oriente, obligado por la Ley de Relaciones con Taiwán a intervenir si China decide acabar con lo que considera una provincia secesionista (se prevé el tratamiento de una “ley anti-secesión” en el Parlamento chino para marzo), y comprometido con Japón en mantener bajo control el Mar de China. Los intereses comerciales jugaron su papel: datos publicados en diciembre último, por Eurostat consignan que entre 2002 y 2003 la UE casi duplicó sus ventas de armas a China. “*Esto puede marcar un hito significativo: el momento en que la UE hizo una elección entre los intereses estratégicos de EEUU y China – y eligió China*” (TE 13/1). La disidencia europea se expresa también en el levantamiento de sanciones diplomáticas a Cuba (C 28/1) en momentos en que los EE.UU. doblan la apuesta con el nombramiento de un exiliado cubano nacionalizado estadounidense, el empresario Carlos Gutierrez, a cargo de la Secretaría de Comercio (una de sus funciones principales es la de supervisar el cumplimiento del embargo contra la isla).

La aceptación de los límites del “poder blando”, por otra parte, se expresa en la tendencia a la coordinación militar entre los estados-nación partidarios de un “orden consensual”: la marina de guerra de Fran-

cia (principal exportador europeo de armas a China) realizó maniobras con este país en marzo (lo que motivó la reacción del Departamento de Defensa norteamericano. Rusia y China, signatarios del Acuerdo de Shangai, anunciaron a fines de 2004 que realizarán maniobras conjuntas en gran escala, con participa-

ción de submarinos y bombarderos estratégicos (LF 30/12/2004). Queda para el futuro observar si los conflictos intercapitalistas emergentes se profundizan hasta el punto en que, y frente a la hegemonía bélica norteamericana, la unión haga la fuerza.

Conflicto social

La deslegitimación no encuentra sus cauces de acción

Las reformas que expresan el orden vienen a sancionar un nuevo equilibrio de fuerzas entre las clases, derivado del constante incremento de la productividad, por incorporación de maquinaria y tecnología de procesos a la producción, y a la creciente capacidad del capital para gestionar globalmente (incluido el acceso a fuerza de trabajo) el entero proceso de acumulación. El alza de la desocupación se convierte en tendencia general², recortando la capacidad del proletariado organizado para defender sus ingresos. La deslegitimación de los gobiernos que las impulsan aparece como una consecuencia política inmediata: en Rusia, los recortes a los beneficios asociados a la jubilación (que afectan directamente a 6 millones de personas), provocaron las movilizaciones más importantes desde las de los mineros en 1998. En los EE.UU., y según una encuesta de Los Angeles Times, el 54% de la población se opone a la reforma del sistema de pensiones (NEEM 23/1). La percepción del ajuste como imperativo que atraviesa gobiernos de distinto signo comienza a motivar un “malestar estructural” que sin duda genera en la burguesía la obsesión por el “poder blando”. Una encuesta elaborada por BBC da cuenta de que un 66% de la población mundial cree que las perspectivas económicas globales están empeorando. El pesimismo se extiende a las perspectivas de las economías nacionales en Corea del Sur (88%), Italia (81%), Francia (74%), Japón (53%), Alemania (52%) y los EE.UU. (51%) (BBC 25/1).

El malestar no parece sin embargo encontrar un cauce adecuado de acción. La resignación con que la población acompañó la puesta en marcha de Hatz IV

sorprende a las mismas autoridades alemanas (EP 7/1), teniendo en cuenta que estuvo precedida por movilizaciones semanales, especialmente en el Este (“movilizaciones de los lunes”) durante todo 2004. “*Si los trabajadores de las grandes empresas están atemorizados, nada sorprende que también las capas más bajas y desorganizadas permanezcan inertes.*” (EP 7/1).

La “desorganización” del movimiento obrero alemán no obedece (al menos no únicamente) a orientaciones erróneas de sus dirigentes. El capital alemán, gracias a la “globalización selectiva”, opera en un mercado de fuerza de trabajo ampliado (incluye a los países de Europa del Este), lo que le permite utilizar la deslocalización a la vez como alternativa y como amenaza. Las garantías a las inversiones (la “seguridad jurídica” obligada a los integrantes de la UE como espacio de acumulación) permiten a la burguesía trascender las barreras nacionales inclusive en lo que hace a sus ámbitos de representación (en el caso europeo, el European Round Table – ERT – organización patronal que organiza al gran capital). No sucede esto aún, al menos en la práctica, en el caso de las organizaciones sindicales. El que los sindicatos centren su función en la defensa del precio y las condiciones de utilización, por parte de la burguesía, de la fuerza de trabajo (que, dado su carácter integrado al sistema, no pueden gestionar sino como atributo del capital), los impulsa a rechazar todo avance sobre la “globalización selectiva” (el caso más inmediato es el de la inmigración de trabajadores), cuyo efecto inmediato sería el de la expansión del mercado nacional de trabajo y un nuevo impulso a la baja de salarios. El nuevo orden global no podrá ser desafiado sin nuevas formas de acción organizada que superen los marcos nacionales en función de un interés estratégico de largo plazo, probablemente cuando la propia potencia del capital derribe las barreras que segmentan en marcos nacionales a los portadores de la fuerza de trabajo.

² Que el “recorte de empleos”, que se presenta como una consecuencia de la “crisis”, obedece al incremento de la composición orgánica del capital (y el consecuente aumento del producto por trabajador), lo ejemplifica el caso de las automotrices alemanas: no sólo anuncian despidos las empresas en “crisis” (Opel, Daimler-Chrysler, Volkswagen) sino también las que están ganando posiciones en el mercado (Audi). Recordemos que en 2003 la economía norteamericana, al tiempo que alcanzaba la tasa de crecimiento más grande en 20 años (7%), sólo generó unos 1.000 empleos.

América Latina

La reelección de Bush ha sido tomada con cierta indiferencia dentro del continente, que en los últimos cuatro años fue desplazado como foco de atención por la política del mandatario norteamericano hacia Medio Oriente.

Sin embargo, los cambios en el área comercial y las declaraciones de la ahora secretaria de estado, Condoleezza Rice, auguran una nueva etapa. Los cambios en el área comercial intentan lograr más protagonismo de EE.UU. en los futuros acuerdos comerciales, sobre todo con México y Centroamérica. Región está última que intenta ser la puesta a punto (plan piloto) de un acuerdo mayor, que no es otra cosa que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Por otro lado, las afirmaciones de Rice de incluir a Cuba como país con régimen totalitario y por ende peligroso para libertad en el mundo y los intereses de EE.UU. amenaza con una invasión a la isla. Pero no sólo fue Cuba, que ya está acostumbrada a estas amenazas, sino que también Venezuela fue puesta en la mira, siendo calificada como “*fuera negativa en la región*”.

A partir de estas afirmaciones trataremos de explicar qué están proponiendo estos dos países para que EE.UU. los tenga en la mira, y hasta pueda invadirlo en un futuro cercano.

También analizaremos el conflicto –que se relaciona con lo anterior– entre Colombia y Venezuela, siendo el primer país el aliado de EE.UU. en la región a la vez que utilizado como punta de lanza para aplicar la política en Sudamérica.

Por último, Bolivia vuelve a ser foco de conflicto en la región, tanto por los movimientos indígenas como por las demandas autonomistas, y ya está incluida por EE.UU. como potencial amenaza para el futuro.

Coyuntura Política

El ALBA como alternativa política y económica: Venezuela y Cuba

Tal como dijimos en la introducción, la avanzada norteamericana en materia comercial, va a intensificarse en las regiones más próximas a su país. México y Centroamérica serán las regiones donde los acuerdos bilaterales y Tratados de Libre Comercio, van a tratar de imponerse: “*La reelección de Bush no ha generado simpatías en América Latina (...) siendo probable que aumente la prioridad relativa para Washington del tercio de América Latina que está al norte del canal de Panamá -tanto por razones geográficas como por influencia del voto latino- y que disminuya la importancia de América del Sur; donde tiende a consolidarse el liderazgo de Brasil, en cooperación y no en conflicto con los EE.UU.*”, asegura el analista Rosendo Fraga. (LN 7/1).

Dos días más tarde un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. publicado por el mismo diario asegura las declaraciones de Fraga: “*La opción más probable de los EE.UU. en los próximos años será la de profundizar los lazos con México y América Central, reconociendo un rol creciente a Brasil y al MERCOSUR en el hemisferio sur*”, (LN 9/1).

Ante este cuadro de situación la meta del ALCA se tratará de implantar de manera progresiva, tratando de ir desgastando a las burguesías más importantes de la región, que necesitan imperiosamente de nuevos mercados.

En medio de esta situación se lanzó un plan alternativo para implantar un modelo de integración diferente en estas tierras, que empezó a tomar forma el

14 de diciembre pasado con motivo del décimo aniversario de la primera visita del presidente venezolano Hugo Chávez a Cuba. En ese encuentro se sentaron las bases para un amplio y profundo intercambio entre estos dos países³.

En la declaración conjunta, el acuerdo tuvo como meta condenar específicamente al ALCA, que “*es la expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que, de entrar en vigor, constituiría una profundización del neoliberalismo y crearía niveles de dependencia y subordinación sin precedentes.*” Es decir, el ALCA sólo conduciría “*a la desunión aún mayor de los países latinoamericanos, a mayor pobreza y desesperación de los sectores mayoritarios de nuestros países, a la desnacionalización de las economías de la región y a una subordinación absoluta a los dictados desde el exterior.*”

Este rechazo hacia el ALCA es diametralmente opuesto a la pelea que impulsan las diferentes burguesías latinoamericanas –encabezada por la brasileña como ya vimos en varias ocasiones– que nunca llegan a cuestionar el acuerdo de esta manera, sino que buscan determinar quiénes logran una inserción en los nichos de mercado que queden una vez concluido el acuerdo. Uno de los hombres más influyentes y capaces del gobierno de Lula, el canciller Celso Amorim –un crítico del ALCA tal como está concebido– expresa esta posición de manera cabal. El canciller, interrogado sobre si el gobierno brasileño perdió el

³ Aquí no estamos hablando de la importancia económica de estos dos países sino del alcance político que este acuerdo genera en la región.

rumbo sobre la política exterior, contestó que: “Si usted cree que su rumbo es sólo negociar el ALCA a cualquier costo, eso es diferente. No estamos contra el ALCA, sino a favor de él, y no somos antinorteamericanos tampoco” (LN 19/12). Para luego afirmar que: “hay tres acuerdos que tienen que caminar paralelamente: el de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el del ALCA y el de la Unión Europea (UE)”.

Esta diferencia entre realizar un acuerdo alternativo, que intenta ser modelo para futuros acuerdos, a otro que intenta mejorar el ALCA, para la mayor cantidad de empresarios posibles, es lo que genera la inclusión de Venezuela y Cuba en las declaraciones de EE.UU. tal como vimos en la introducción a esta sección, caratulando bajo el rótulo de “amenaza totalitaria” a Cuba y una “fuerza negativa” a Venezuela.

Pero vayamos a ver cuál es la propuesta en concreto de estos países que intentan posicionarse frente a la hegemonía norteamericana, liderando uno de los polos de la contrahegemonía en América Latina.

En la declaración conjunta de ambos países, no se rechaza la integración económica latinoamericana y caribeña, sólo que dicha integración pretende ser a partir de “la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar todos de común acuerdo hacia niveles más altos de desarrollo, puede satisfacer las necesidades y anhelos de los países latinoamericanos y caribeños y, a la par, preservar su independencia, soberanía e identidad.”

A partir de esto, se tomaron de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), propuesta por Chávez, los principios rectores de la verdadera integración latinoamericana y caribeña, que tendría como principales ejes los siguientes puntos:

- El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana y caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad económica.
- Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países y la dimensión de sus economías, y que garantice el acceso de todas las naciones que participen en los beneficios que se deriven del proceso de integración.
- La complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes y no la competencia entre países y producciones, de tal modo que se promueva una especialización productiva eficiente y competitiva que sea compatible con el desarrollo económico equilibrado en cada país, con las estrategias de lucha contra la pobreza y con la preservación de la identidad cultural de los pueblos.

- Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos desarrollados en la región, que incluya un Plan Continental contra el Analfabetismo, (ya implementado en Venezuela); un plan latinoamericano de tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que carecen de tales servicios y un plan de becas de carácter regional en las áreas de mayor interés para el desarrollo económico y social.
- Creación del Fondo de Emergencia Social.
- Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte (carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y aéreas, telecomunicaciones y otras), protección del medio ambiente, integración energética (Petroamérica), fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la región de los inversionistas foráneos (Fondo Latinoamericano de Inversiones, un Banco de Desarrollo del Sur, y la Sociedad de Garantías Recíprocas Latinoamericanas).
- Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas. Creación de la Televisora del Sur (TELESUR) como instrumento alternativo al servicio de la difusión de nuestras realidades.
- Medidas para que las normas de propiedad intelectual, al tiempo que protejan el patrimonio de los países latinoamericanos y caribeños frente a la voracidad de las empresas transnacionales, no se conviertan en un freno a la necesaria cooperación en todos los terrenos entre nuestros países.⁴

Tras esta declaración, ambos países firmaron un acuerdo sin precedentes de complementariedad económica, en el que sobresalen los acuerdos energéticos, de salud e infraestructura.

EE.UU. y los países del “eje del mal” de la región

Para los arquitectos del proyecto que encabeza Bush (las grandes compañías transnacionales), este tipo de integración (que no pretende ser competitiva sino complementaria, que no pretende eliminar a los sectores más débiles sino incorporarlos al proceso de integración) tiene que ser impedido o eliminado para que no se derrame en todo el continente. La calificación de “estado totalitario” o de “fuerza negativa en la región” que estos dos países recibieron, no se conciben en los papeles ni en los hechos con el proyecto que intentan aplicar.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respondió a los dichos de Bush, afirmando que: “EE.UU. se cree el dueño del mundo que arremete pueblos y atropella soberanías” (C 20/1).

⁴ Para más datos ver LJdM los días 15 y 16 de Diciembre.

Pero también parece que la región andina en su totalidad es incluida como un área a ser tenida en cuenta por la potencia del norte. En el mismo informe del Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano, se admite que las futuras crisis de institucionalidad que sufrirá la región podrían devenir en fuertes crisis de estado, que se podrían evitar siempre y cuando actúe una *intervención internacional eficaz* (LN 9/1), identificando a los *movimientos de reivindicación indigenista* como un riesgo para *seguridad en la región*.

De esta forma, y tal como desarrollamos en nuestra sección de Conflicto Social, el avance de los movimientos indígenas en Bolivia, en Ecuador y en mucho menor medida en Perú, pueden ser excusas para futuras intervenciones extranjeras.

El conflicto Venezuela-Colombia y los primeros avatares de un conflicto mayor

Los hechos

Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda –conocido como el “canciller” o el encargado de las relaciones internacionales de esa organización– fue capturado el día 13 en Caracas por militares y policías venezolanos y colombianos, siendo entregado luego a autoridades colombianas a cambio del pago de un rescate. Al poco tiempo de que el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, reconoció oficialmente el pago de dinero a cambio de Rodrigo Granda –quién, luego de ser capturado, inmediatamente fue trasladado de Caracas hacia Cúcuta, ciudad fronteriza ubicada a 550 Km. al oeste de Bogotá donde se hizo la entrega final a las autoridades colombianas–, se generó un conflicto diplomático: Venezuela acusó a Colombia de violar las leyes internacionales a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

A partir de esta declaración oficial por parte del gobierno de Colombia, el propio vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, fue quien fustigó los comentarios del ministro Uribe y declaró ante toda la prensa internacional que el ministro colombiano “*se metió un autogol*” al aceptar públicamente que pagó “*un soborno por secuestrar a una persona en un país distinto a Colombia*” (ya que) “*está haciéndose partícipe de un delito que puede tener implicaciones internacionales*”, (C 13/01). El funcionario aseguró que el ministro colombiano sería responsable del “*soborno de varios funcionarios venezolanos, lo cual es extremadamente grave porque entre los sobornos están efectivos de las Fuerza Armadas venezolanas*”, (C 13/01). Formalizando el conflicto diplomático, el segundo de Chávez, agregó: “*hubo una violación de la soberanía de Venezuela*”, (C 14/01). Bogotá respondió a través de su ministro del interior, Sabas Pretelt, con la siguiente frase: “*hubo una oferta de recompensa para*

quien nos diera información sobre el señor Granda. Aparecieron una personas, no sé quiénes fueron, entregaron información al ministerio de defensa y se capturó a ese señor en Cúcuta sin violar la soberanía de nuestro país”, (C15/01).

Ante esta situación, el propio presidente Hugo Chávez mostró toda su furia contra el gobierno colombiano: “*exigió a Álvaro Uribe que pida perdón porque su país ‘violó flagrantemente la soberanía de Venezuela’ (...) y ordenó en suspender los acuerdos y convenios de cooperación suscritos con Colombia*”, (C 15/01). Al mismo tiempo, Chávez ordenó retirar al embajador venezolano en Colombia hasta que Uribe no se disculpase (C 15/01). El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, se justificó: la recompensa, dijo, “*es un instrumento absolutamente legítimo y necesario en la lucha contra el terrorismo y los grupos armados ilegales*”.

Ante esta situación se cerraron pasos fronterizos, acompañados de una versión sobre la posibilidad de suspender un gasoducto que está en construcción entre ambos países. Se interrumpió momentáneamente el intercambio comercial, a raíz de la crisis de las relaciones diplomáticas, que se había recuperado en los últimos tiempos. El año pasado se intercambiaron bienes y servicios por estimados 2.400 millones de dólares, casi 90% más que en 2003. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia después de EE.UU. y el más importante dentro de sus socios andinos. El comercio de los últimos meses fue 2004 fue superavitario para Colombia, contra un déficit de 2003.

Luego hubo intentos de mediación por parte de Brasil así como también de Perú, país que finalmente, por tener temporalmente la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ofreció el lugar neutral para que los cancilleres de ambos países se reunieran a dialogar. Carolina Barco por Colombia y Alí Rodríguez por Venezuela no llegaron a ningún acuerdo en la reunión limeña, pero manifestaron los inicios del final de esta crisis: si bien las partes siguieron encontradas –se cancelaron las relaciones comerciales, se comenzó a pedir visa a ciudadanos colombianos que crucen la frontera con Venezuela– mantener este conflicto implica pérdida de divisas. Pero, también, algo más importante aún: un conflicto bélico en puerta, a raíz de los intereses que hay detrás de Colombia y el lugar en el contexto político que ocupan ambos países. Si bien no pudieron sacar el comunicado en conjunto porque ninguno de los cancilleres cedió en sus reclamos, días después, ante la tensa situación, se acordó un encuentro entre los dos presidentes para comienzos de febrero en el que tratarán de mediar para evitar algo que, por el momento, no les conviene a ninguno de los dos: una guerra.

Las implicancias políticas

Ahora bien, como mencionamos, es necesario analizar el conflicto en torno a los intereses políticos de ambos países. Está claro que Venezuela se hubiese quejado que cualquier país que soborne a sus fuerzas de seguridad. Pero ese país es justamente Colombia y no es algo de menor importancia. Las autoridades colombianas han acusado al gobierno venezolano de proteger y ayudar a la guerrilla, y además, “ofreció Uribe, apoyado por EE.UU., a discutir públicamente con Chávez sobre terrorismo”, (C 15/01). El país del norte salió al apoyo de Colombia defendiendo al país caribeño sobre su derecho “de liberarse del terrorismo” y dijo que Colombia no ha violado “la soberanía de Venezuela” (C 15/01). A su vez, las FARC pidieron explicaciones a Chávez sobre si realmente habían intervenido oficiales venezolanos –cuestión que fue confirmada, ya que fueron ocho los militares venezolanos y un colombiano los que operaron en la captura de Granda–, cuestión que fue usada por EE.UU. para relacionar a Venezuela con la guerrilla colombiana: “el gobierno de EE.UU. dijo que coincidía por ‘primera vez y quizá por última’ con el grupo guerrillero en pedir claridad a Chávez sobre sus lazos con esas organizaciones. La posición de EE.UU., aliado de Uribe y adversario de Chávez, la transmitió la Embajada de Bogotá” (C 16/01). De esta forma, el gobierno de Bush utilizó la crisis política en el norte del cono sur, para dividir las aguas entre su principal aliado y su principal rival en la región, asumiendo una posición que reafirma los cambios implementados desde que Condoleezza Rice asumió como secretaria de estado y ubicó a Venezuela “como fuerza negativa para la región” –ver primera parte de la región.

Este posicionamiento de los estadounidenses hizo poner en pie de un conflicto bélico a la región. Es sabida la intención de EE.UU. de erradicar la guerrilla colombiana y de instalarse en la región para contener a Venezuela, la principal aliada de Cuba en América Latina. Asimismo, los intereses económicos norteamericanos fuera de su país son considerados recursos estratégicos y necesarios, además de que EE.UU. tiene como objetivo contener a países políticamente “antinorteamericanos”, o al menos de postura contrahegemónica.

El conflicto Venezuela-Colombia, y la hipótesis de un conflicto abierto entre ambos países, deben entenderse en el contexto de las relaciones políticas actuales y de los intereses económicos de EE.UU. Una participación mayor en la región por un factible apoyo a Colombia en una guerra contra uno de los nuevos países del “eje del mal”, no sólo ayudaría a penetrar en el terreno de las FARC, sino que sería el acceso a una región que tiene recursos económicos importantes y que en el contexto actual no le queda otra alternativa que la militar para entrometerse en

ella, con la justificación, obviamente, de ser países “negativos”, “desfavorables”, “terroristas”. Otrora el petróleo en Irak, en estos momentos la política y los recursos de la región son claros justificativos de un posible conflicto, utilizando a Colombia de carne de cañón para la instalación de una base de poder norteamericano en América del Sur: en lo político... “*Toda oligarquía que se tambalea inventa un conflicto externo para consolidar el frente interno. Usualmente fracasa, como los militares argentinos que tomaron las Malvinas. Toda oligarquía que necesita apoyo de EE.UU. sacrifica a sus compatriotas como carne de cañón contra un gobierno molesto para los estadounidenses. Usualmente le pasa como a Saddam Hussein, armado hasta los dientes por EE.UU. para fustigar a Irán, y luego aniquilado por los propios estadounidenses...* (en lo económico) ...*En el número del último trimestre de 1999 de la revista del Departamento de Estado Foreign Policy figura un artículo de David Henríquez, investigador del Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard, quien afirma que «el objetivo de la mayoría de las guerras actuales es hacer a los países más pequeños, no más grandes.» Sostiene, además, que «regiones ricas como el norte de México, el sur de Brasil o la ciudad costera de Guayaquil se preguntan qué beneficio perciben de sus actuales identidades nacionales»*”⁵. Con respecto a los hidrocarburos, la crítica del autor contribuye con lo siguiente: “*Venezuela detenta el botín más codiciable: los hidrocarburos de los que depende el destino del mundo. Señalamos que en 1998 la prensa de Colombia realizó encuestas sobre un plan para dividirla en dos países, uno dominado por el gobierno y otro por la guerrilla; y que el año inmediato los medios difundieron otro proyecto para seccionar el Zulia, la provincia petrolera más rica de Venezuela. El plan maestro de EE.UU. es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue el petróleo venezolano*”. Por el momento, como mencionamos, habrá acuerdo seguramente entre los presidentes de bajar el tono de la pelea, pero quedará sellado para el futuro de las relaciones políticas este cortocircuito ocurrido entre Venezuela y Colombia.

El Foro Social Mundial

El Anti-Davos: ¿Cuándo y por qué surge?

El Foro Social Mundial se reunió por primera vez en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en el estado de Río Grande Do Sul, en el año 2001 con el objetivo de contraponerse al Foro Económico Mundial de Davos, que desde 1971 viene cumpliendo un papel estratégico en la formulación de pensamiento de los que promueven las políticas neoliberales. Salvo en el año 2004 que salió de Brasil y se trasladó a Mumbai, India, todas sus ediciones, así como la de este año, se realizaron en Porto Alegre. Asistieron a esta última

⁵ Extraído de “*Venezuela: crónica de una guerra anunciada*”, de Luis Brito García (escritor y periodista venezolano).

reunión alrededor de 150.000 personas. Desde el campo de los disertantes, participaron del evento intelectuales, periodistas, dirigentes políticos, sociales y militantes de los más variadas organizaciones. Claro está que diferente es el color político al del tradicional –y ortodoxo económicamente hablando– encuentro de Suiza, aunque no por ello muy homogéneo. En este Foro Social se puede encontrar desde sectores democráticos y disidentes de la política tradicional, el progresismo en el más amplio de los sentidos, y sectores de izquierda, tanto de organizaciones partidarias, sociales, gubernamentales, no gubernamentales, académicas. Si el encuentro de Davos es ámbito de discusión de las políticas económicas de los países más avanzados, en Porto Alegre los temas de discusión, por citar sólo algunos, giran en torno a: Desarrollo democrático y sustentable; Principios, valores, derechos humanos, diversidad e igualdad; Medios, cultura y alternativas a la mercantilización; Poder político, sociedad civil e democracia; Orden mundial democrático, lucha contra la militarización y promoción de la paz.

En las anteriores ediciones uno de los tópicos sobre los que giró el evento fue la cuestión del ALCA. El Foro ha servido para empezar a aglutinar expresiones en contra del acuerdo que, de no haber sufrido los palos en la rueda de los últimos tiempos, tendría que haber comenzado a funcionar en este año 2005. Hoy, para los propios sectores de poder de cada país de América Latina, no es novedad que al menos hay que discutir los términos de ese acuerdo regional, para que su imposición no signifique desaparecer. A su vez, el encuentro tomó auge con la llegada de Lula al poder en enero de 2003. El momento de su asunción, coincidió con la tercera edición del Foro –en donde hay que remarcar que el PT siempre participó de su organización y le dio una amplia difusión, además de realizarse en una de sus primeras capitales de estado gobernadas, que acaba de perder en las últimas elecciones. Allí hablaron el mismo Lula y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, siendo prácticamente los dos únicos gobernantes de peso que asistieron al encuentro, del cual también formó parte el reconocido intelectual Samir Amin. En esa edición, el Foro se convertía en el espacio de discusión de ideas sobre cómo gobernar –en América Latina al menos– siendo parte de la contrahegemonía con el cambio de situación en los últimos dos años de las relaciones de fuerza en la región. Ese empuje decidió sacar el evento del territorio americano y llevarlo en el año 2004 a India. Hay que aclarar que tanto India como diversos países de África participan todos los años activamente del encuentro. Quizá por la distancia no tuvo en esta zona el eco que mereció, ya que también tuvo una participación numerosa por el tipo de evento, al-

rededor de 60.000 personas, de 20 países diferentes, siendo el evento cubierto por prensa de 45 países.

FMI sí, FMI no. Porto Alegre 2005 y las contradicciones y típicas de la contrahegemonía.

Pero este Foro es diferente a los anteriores. El optimismo del encuentro del año 2003 no reinó entre sus participantes. Esto tiene que ver con la situación actual de Brasil que siempre destacamos en este *Análisis* y las posiciones que su presidente Lula ha tomado – más que nada en materia económica–, lo que generó intensos debates entre los participantes del Foro. También, el efecto anti ALCA como aglutinador de espacios progresistas ya no es de extrema necesidad. Esta vez el foco de atención del encuentro pareció ser –o al menos esa era la intención– la discusión de la cuestión militar en Irak y la cuestión de la militarización global lo que reúne a este diverso arco político, social y militante. Además, no tuvo buena recepción el hecho de que Lula haya partido directo del Foro de Porto Alegre, donde lanzó el “*Llamado Global para una Acción contra la Pobreza*”, hacia Suiza, donde participó del encuentro de Davos, y llevó esa flamante propuesta para ser escuchado por las potencias económicas del planeta. Algunos de los participantes se sintieron disgustados por esa acción, ya que justamente el Foro Social Mundial nació como un espacio opositor al encuentro de Davos, justamente por los temas que se discuten en Davos, y los intereses de los que participan. Algunos otros, consideran positivo que un presidente latinoamericano hable de esos temas en el evento que se realiza en los Alpes Suizos.

Pero así como el viaje a Davos de Lula irritó a varios de los participantes, la presencia del FMI y del Banco Mundial en Porto Alegre, a través de un representante de dichos organismos, John Garrison, invitado por una la ONG inglesa Oxfam, también causó polémicas entre algunos de sus participantes tradicionales. El reconocido sociólogo brasileño Emir Sader –uno de los fundadores del Foro– declaró que la presencia de estos organismos marca que el Foro “*gira en falso*”, (C 30/01). Por el contrario, el argentino Atilio Borón, secretario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) consideró que “*la presencia de Garrison en Porto Alegre demuestra la amplitud del Foro Social Mundial, los de Davos, en cambio, no nos invitan*” (C 30/01).

Así, este espacio diseñado para discutir políticas contrahegemónicas se debate en las mismas contradicciones que los gobernantes que deben seguirlas.

Conflicto Social

Bolivia: protesta social por un lado y autonomía por otro

El momento histórico de vertiginosos cambios políticos, reiterados cambios estatales, recomposición de las clases, de las identidades colectivas, de las alianzas y fuerzas políticas al interior de la sociedad boliviana plantea un cuestionamiento permanente a la estructura de dominación social. Este cuestionamiento se expresó en la voz del primer mandatario: *"No me dejan gobernar"* (LTC 10/1).

Acusando a dos fuerzas oscuras que caracterizó de esta manera: una *"quiere un cambio de modelo, que el gobierno nacionalice todo, que las transnacionales se vayan a su casa y forzarnos a hacer y aplicar su programa"*, la otra puja por *"preservar no solamente el orden liberal sino sus intereses particulares y sus intereses de grupo pequeñísimo de gigantesco poder"* (LN 11/1).

La primera fuerza a la que se refiere Mesa se concentra, en la coyuntura actual, en la segunda ciudad de Bolivia, El Alto, organizada en la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve, que nuclea 500 zonas barriales). Esta Federación comenzó el nuevo año convocando a sus bases a un paro indefinido. La medida de fuerza reclama que el gobierno rescinda el contrato de provisión de agua potable de la empresa Aguas de Illimani (filial de la sociedad francesa Suez-Lyonnais des Eaux, con la cual nos reencontraremos en la sección Argentina) por incumplimiento del contrato desde 1997.

El Alto ha pasado de tener 11 mil habitantes en 1950 a poco más de 700 mil en 2001. Del total de la población trabajadora, el 69% lo hace en el ámbito informal, de empleo precario. Pese a esto poco más del 43% de los alteños son obreros, operarios o empleados.

Esta fuerte identidad obrera y los nuevos motivos de sublevación no produjeron un cambio en los medios de movilización de las fuerzas sociales que se mantiene igual que hace cien o doscientos años: el asedio a las ciudades, la fuerza de masa y la obstrucción de las vías de comunicación entre las ciudades.

El paro cívico que utilizó estos métodos, es el resultado de la condena que 200 mil familias sufren al no contar con agua. La llamada *"guerra del agua"*⁶ mostró que los recursos naturales forman parte fundamental del sistema de reproducción cultural y material de las comunidades agrarias, nodo de la sociedad boliviana. Esto hace de la defensa y el control colectivo de ciertos recursos naturales un principio básico de la preservación histórica de las relaciones sociales de producción comunitarias.

El paro cívico, que logró una densa red de movilización social y política demostración de la vitalidad de las Juntas Vecinales, consiguió del Gobierno del Estado – por decreto supremo– que rescinda el contrato a la empresa transnacional.

La otra fuerza a la que se refería el presidente boliviano actúa en la región de Santa Cruz y la conforma: El Comité Cívico, La Federación de Empresarios y La Cámara de Empresarios de Santa Cruz. El reclamo de estas corporaciones empresarias, en su lógica de maximizar ganancias,

es la reducción del precio del combustible. Por Decreto Supremo en el mes de diciembre, el ejecutivo puso fin al subsidio estatal de 30 millones de dólares anuales a los combustibles, subiendo en un 10% las naftas y en un 23% el gasoil. El paro total de 48 horas de todas las actividades santacruceñas mostró la capacidad de las organizaciones del capital de conducir los reclamos regionales que alcanzan su clímax en la reiteración de escindir del gobierno central.

Y justamente al cierre de esta edición, la fuerza de los sectores más concentrados de Santa Cruz, pudieron jaquear al gobierno de Mesa. Triunfó un cabildo abierto que proclamó la escisión del gobierno central. Si bien no pudo elegir su propio gobernador, sí pudo negociar con el gobierno de Mesa que un gobierno transitorio hasta abril, emanado de la instancia deliberativa abierta, gobierne el estado más rico del país andino. En ese mes, el gobierno nacional debe realizar un plebiscito sobre autonomías para ver si la población de todo el país está dispuesta a reformar la constitución, cuyo carácter centralista y unitario no habilita que los gobernadores sean elegidos en forma directa por cada distrito, sino que sea el gobierno central el que los designe. Luego de varios días de conflicto, el presidente tuvo que ceder para evitar un conflicto mayor y evitar la escisión, legitimando la autoridad provisional en forma transitoria. A su vez, se comprometió a no declarar el estado de sitio, y a rebajar el precio del combustible –la chispa que había encendido el fuego–. Ahora, bien, es necesario aclarar, que los que han conducido este proceso político de búsqueda de autonomía –aunque con apoyo otros sectores de la población– son los sectores más poderosos de Bolivia que controlan el sector de hidrocarburos y la agroindustria⁷.

Al distinto accionar de estas fuerzas, que corroen la endeble gobernabilidad Andina, se le sumó el pedido de Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo, principal fuerza política en la actualidad,⁸ que apoyando el reclamo del Alto sostuvo: *"si el gobierno no se suma al reclamo del pueblo que se convoque a elecciones (...) estamos preparados, pero no se trata de Evo Morales, sino del conjunto de fuerzas sociales, porque la máxima estructura del Movimiento al Socialismo son los movimientos sociales"* (LTC 13/1).

El nivel de conflictividad intenta ser descomprimido con la convocatoria que el gobierno boliviano hizo al poder legislativo con las intenciones de conformar una "Bancada Parlamentaria Patriótica" que lo ayude a construir consenso. Si esto no alcanza no se descarta la coerción y con la finalidad de apertrecharse el Ejecutivo aprobó por Decreto Supremo, en conformidad con las Fuerzas Armadas, el *"Manual de Uso de las Fuerzas en conflictos Internos"*. Aunque a partir de ahora el respeto por los cruceños debe ser mayor, ellos ya pueden decidir también no sólo en lo económico sino también en el devenir político del gobierno de Mesa.

⁷ En la próxima edición analizaremos qué implicancias tiene este conflicto político que reclama, sino la escisión, al menos un alto grado de autonomía para la región de Santa Cruz.

⁸ Véase *Análisis* N° 55

⁶ Levantamiento popular de abril y septiembre de 2000 contra la privatización de recursos hídricos en Cochabamba.

Argentina

El primer mes del nuevo año ha confirmado lo que ensayábamos en la edición anterior: la batalla con los capitales que disponen de las otrora empresas públicas de servicios (fundamentales) se profundizó, en cuanto comenzó a cerrarse el frente con los acreedores privados. Batalla encabezada por la fracción local del capital más concentrado (autodenominado *burguesía nacional*) indispueta a transferir el grueso de la riqueza social a los tenedores de deuda argentina, o a los concesionarios de las privatizadas. *Quita, control de tarifas e inversiones*, parecen ser las palabras claves de una burguesía local, atenta, sobre todo, a no despertar al animal estatizador que, temen, podría ocultarse bajo la piel de un patagónico cordero.

En el marco de esta disputa observaremos brevemente el caso de Aguas Argentinas, en particular y del agua en el mundo, en general.

En la coyuntura política local, luego de estallar el conflicto al interior del PJ bonaerense, la intensidad de la contienda fue menguando hasta transformarse en “tensa calma”.

Pelea por las ganancias

Abandonando el default (de una deuda impagable)

“*Convierta sus bonos en realidad*” tituló el Ministerio de Economía al documento publicado en la prensa nacional, que inició oficialmente el canje de la deuda en situación de default. Se trata de los 81.800 millones de dólares que el Estado argentino debe a sus acreedores privados, y que durante tres redondos años mantuvo en “*cesación de pagos*”. El denominado canje significa que el Estado reinicia los pagos de dichas acreencias con una salvedad histórica: descuenta un aproximado 60% del capital adeudado y extiende el cronograma de devolución (en relación con la pauta temporal original). Contra estos cambios ejecutados en las variables capital y tiempo se descargó sistemáticamente, a lo largo de los mencionados tres años, la oposición de los centros financieros internacionales. Oposición que, en su formato de amenazas, presiones y acosos verbales y de otro tipo (renuncia del Bank of New York a operar como agente de cambio de deuda; cancelación de giros del FMI, BM y BID; ejecución judicial de bienes públicos en el exterior; etc.) se continúan ahora en un nuevo nivel de disputa.

Pero veamos qué implica esta renegociación, según los términos citados, más allá de la mera coyuntura. Tal y como consignamos en el Análisis... N° 49, el canje de la deuda, aun suponiendo una aceptación del 100% de los acreedores, otorga al gobierno no más de diez años de oxígeno. Durante una década el país deberá pagar 1.000 millones de dólares por año a los acreedores privados; pero a partir de 2014 los desembolsos anuales alcanzarían los 4.000 millones, llegando entre los años 2025 y 2034 a una exigencia de pago del orden de los 6.000 y 7.500 millones de dólares (C 10/5). Y esto sólo en materia de cancelaciones de la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados. Por consiguiente, a veinte años vista –y sumando los compromisos con los organismos multilaterales, cuya deuda el país no dejó de saldar obedien-

temente–, la cuestión de la deuda, no obstante la histórica reestructuración operada por la gestión Kirchner–Lavagna, carece de solución. Los futuros pagos requerirán más créditos y así sucesivamente según la fatal lógica en espiral de una deuda, en definitiva, impagable.

Con todo, y volviendo a la situación inmediata, el gobierno contabilizó en los primeros días una aceptación aproximada del canje por encima del 20% de la deuda total. Este porcentaje contiene a las AFJP que operan en el mercado nacional, cuya adhesión al programa oficial fue negociada varios meses atrás.

Por el contrario, en el exterior, el heterogéneo universo de los tenedores de deuda argentina (grandes bancos y fondos de inversión y pequeños bonistas individuales) se debate entre la espera y el rechazo frontal. Mientras los hombres del Ministerio de Economía –principalmente el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen– presentan la oferta en las principales ciudades del orbe (Nueva York, Roma, Tokio, etc); desde los centros financieros internacionales y los gobiernos de los países más poderosos se ha sentenciado que el canje de la deuda será aceptable y aceptado –a escala mundial– si el 75% de los tenedores de deuda ingresan a la operación. Así, grupos de bonistas y bancos de primera línea han venido agitando una intransigente política de rechazo.

El caso más sintomático de oposición, lo expresa el capital italiano y su gobierno del Estado. Ya hemos anotado en anteriores ediciones la conflictiva situación interna que atraviesa a Italia, definida por el enfrentamiento de los 450.000 bonistas individuales contra los bancos de primera línea. Aquellos acusan a estos últimos de haberles vendido bonos de deuda argentina, altamente riesgosos, presuntamente conedores de su futura imposibilidad de cobro. De hecho, llegan a dos mil los juicios entablados por los ahorristas italianos contra bancos italianos. Semejante cuadro determina la ferviente oposición del representante de la banca italiana, Nicola Stock y de la primera

línea del gobierno de Berlusconi. El propio ministro de Economía italiano, Doménico Siniscalco, aplicó a la oferta de canje, los calificativos “*pobre y muy avara*”, agregando que la Argentina “*no ha hecho una verdadera negociación de buena fe*” (C 14/1). Al mismo tiempo, el representante de Italia en el directorio del FMI, Piercarlo Padoan, sentenció que “*para que la oferta argentina sea financieramente sustentable debe ser aprobada como mínimo por el 75% de los acreedores*” (C 13/1). También el vicencanciller y subsecretario para las Américas, Gianpaolo Bettamio, amenazó: “*No hay que excluir que en el ámbito de la Unión Europea se hable de sanciones como se aplicaron a Libia y Cuba*” (C 19/1).

Por otro lado, y como venimos observando en los anteriores *Análisis*, la fracción local del capital más concentrado, se ha mantenido unida en la instancia de enfrentamiento con el capital acreedor. La necesidad de trasladar la mínima porción de la riqueza social - producida por los trabajadores- hacia los acreedores externos e internos, los encontró unidos a la hora de ordenar la ejecución de la cesación de pagos y la posterior quita de la deuda. Todas las entidades del capital que operan en el país, desde los bancos más grandes (ABA), pasando por la Cámara de Exportadores, por la Caja de Valores y por la Unión Industrial, han salido a ofrecer su apoyo a la misión del gobierno en el exterior (ver la LN 13/1).

De manera muy significativa algunos empresarios argentinos realizaron, en el foro económico de Davos, una encendida defensa de la política económica externa, frente a funcionarios del gobierno de EE.UU., a hombres de las finanzas mundiales y a la mismísima Anne Krueger, directora del FMI. Enrique Pescarmona (Impsa) afirmó que el país va “*a crecer más del 6% y otro tanto en el 2006 (...) tal vez los Estados deban tomar algunas lecciones de la Argentina: ellos tienen déficit gemelos mientras que nuestro país tiene superávit gemelos*” -en clara referencia al creciente déficit de EE.UU. Allí mismo Eduardo Elsztain (Irsa) sostuvo que “*es mejor hacer una oferta realista y demostrar que podemos pagar lo que prometemos*” (C y LN 28/1).

Con todo, mientras el frente externo de la deuda comienza a cerrarse, crece la tensión en torno a la disputa por los servicios públicos privatizados.

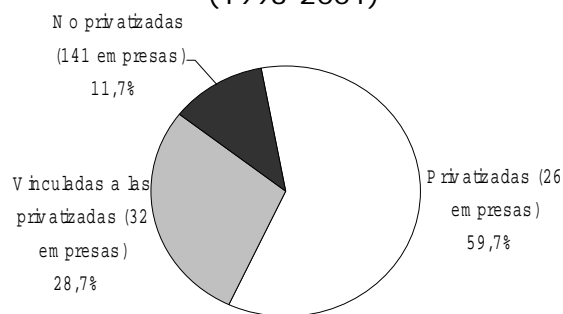
Cercando a las privatizadas

Antes de viajar a París, para reunirse con su par francés, el presidente Néstor Kirchner sentenció públicamente: “*Le digo a Aguas Argentinas que invierta, que es hora de que el servicio de agua llegue a todos los argentinos, igual que el servicio de cloacas. Si no entienden la necesidad que tiene la gente, tenemos las manos firmes para decidir si no cumplen con lo que se comprometieron con el pueblo argentino*” (C

17/1). De regreso, en un acto organizado en La Matanza, en donde se inauguraba una red de agua potable, reiteró: “*Esta obra la tendría que haber hecho Aguas Argentinas, que se la entregaron en la década pasada a un grupo económico al que solo le importaba su rentabilidad, a costa de todos ustedes (...) Me cuesta creer que se sientan a negociar pidiendo aumentos del 60% en el agua. ¡Minga que les vamos a aumentar! Primero que le den agua al pueblo*” (LN 28/1). Sintéticamente el ministro de Planificación, y encargado de la renegociación con las privatizadas, Julio De Vido, deslizó la posibilidad de cancelar la concesión de Aguas: “*Las inversiones son las que van a determinar si la continuidad del contrato es posible*” (C 29/1). Finalmente, el mismo día que lanza el canje de la deuda, el gobierno sanciona a las concesionarias Edesur, Edenor, Edelap y Aguas como consecuencia de una serie de cortes en el suministro del agua y la luz y por la falta de inversiones programadas en los contratos. Las multas son por 173 millones de pesos (LN 12/1).

Este avasallamiento oficial, responde a la batería de presiones y demandas judiciales (en el tribunal internacional del BM -CIADI-) lanzadas por los capitales que controlan la producción y distribución de los servicios públicos en el país, en búsqueda de la mayor libertad de acción (ajuste tarifario, abandono de inversiones y de la ampliación de la infraestructura, etc). Acoso que también sabe ser canalizado por el FMI, el Grupo de los 7 o “*mercenarios*” lobbistas como el ex presidente español, Felipe González. Una de las amenazas más comunes de estos capitales refiere a la presunta situación de abandono de las inversiones y con-

Distribución de utilidades de las 200 mayores empresas de la Argentina según su vínculo con las privatizaciones (1993-2001)



secuente derrumbe de los servicios. El mes pasado una fracción del capital español (fuertemente comprometido en la inestable economía Argentina) lanzó desde el diario El País: “*Brasil tiene que ser la apuesta estratégica de España en América del Sur. El efecto de salida (de inversiones) de Argentina está haciendo cada vez más atractivo a Brasil como centro de negocios para las empresas españolas*” (C 11/1). Es cierto que el propio presidente

ibérico, Rodríguez Zapatero, visitó la Argentina bajando sustancialmente el tono de las agresiones. Pero, nada indica que las tensiones vayan a congelarse.

Por cierto, la batalla quedó “en el tintero” cuando en diciembre pasado el Poder Legislativo suspendió el tratamiento de la “nueva ley marco”, que reformula integralmente los contratos con las privatizadas. Así, y como veremos más adelante, hasta ahora el gobierno ha ejecutado el diseño de la fracción local del capital más concentrado: poder controlar el manejo discrecional que realizan las concesionarias sobre las tarifas (costos para la producción y el comercio) y las inversiones (incremento o caída de los recursos energéticos clave para producir).

Habiendo sido el de Aguas Argentinas el caso más sonado de disputa el mes pasado, veamos la situación mundial del agua potable y la ubicación y praxis de dicha empresa.

El negocio del agua

Oro azul

El agua potable es un recurso fundamental para la vida. Veamos algunos datos de la implicancia que esto tiene:

- El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% restante está en proceso de pérdida de calidad y cantidad debido al consumo excesivo.

- El 70% del agua dulce disponible es utilizado para el riego agrícola; el 10% sirve a la industria y los usos municipales o domésticos; el resto para producir electricidad, navegar y el entretenimiento.

- Un habitante sobre cinco del planeta no tiene agua potable. En 2025 habrá 8 mil millones de habitantes: 60% vivirá en ciudades; 3 mil millones tendrá menos de 1.700 metros cúbicos de agua por año (umbral de alerta para la ONU).

- La mitad de los ríos y lagos europeos y estadounidenses están gravemente contaminados. La situación en los países subdesarrollados no es mejor. 20% de las especies acuáticas ha desaparecido a lo largo de los últimos años, o están en peligro de extinción.

- Tres millones de personas mueren por año en el mundo por beber aguas insalubres.

Por todo esto, la disputa por el control del “oro azul”, se transformó en una batalla feroz entre diferentes grupos económicos, que incluye, por supuesto, la participación de Estados nacionales y de organismo internacionales.

En 1994, el Banco Mundial impulsó y financió, junto a gobiernos como el francés y el canadiense, y a empresas como Suez Lyonnaise des Eaux, el Consejo Mundial del Agua (CMA). Este organismo tiene como meta definir una política mundial para la obtención y comercialización del agua, desplegada “a partir

de tres principios que constituyen otras tantas dinámicas: la comercialización, privatización e integración oligopólica mundial entre los distintos sectores (agua potable, agua embotellada, tratamiento de las aguas, bebidas gaseosas), en un contexto de luchas por la hegemonía de los mercados y de conflictos de poderes entre Estados (...) En esta perspectiva, la administración pública directa se revelaría cada vez más inadecuada e ineficaz. Convendría entonces transferirla a las empresas privadas, primordialmente según el modelo francés de administración delegada. Esta política es perfectamente coherente con la desregulación y la privatización de los servicios públicos básicos generalizada en el mundo entero: gas, electricidad, transportes urbanos, telecomunicaciones, correo (...) La comercialización desemboca en la tercera dinámica, menos avanzada que las dos precedentes, de la nueva “conquista del agua”: la integración entre todos los sectores, en el marco de una lucha por la supervivencia y la hegemonía en el seno del oligopolio mundial. Cada uno de estos sectores -agua potable, agua embotellada, bebidas gaseosas, tratamiento de las aguas residuales- tiene por ahora sus actores, sus profesiones, sus mercados, sus conflictos. El agua potable (“los grifos”), por ejemplo, para Vivendi, Suez-Lyonnaise des Eaux, Thames Water, Biwater, Saur-Bouygues (y sus filiales). El agua (mineral) embotellada, sobre todo para Nestlé y Danone, respectivamente N° 1 y n° 2 mundiales, muy por encima de las demás embotelladoras. Entre éstas últimas, Coca-Cola y Pepsi Cola devienen competidores de los “grifos”, por el desarrollo y la comercialización -aun mediante pequeños puestos de consumo de agua llamada sintética, purificada, que pretende ser más sana.

Por su lado, las empresas de servicio de agua potable están cada día más presentes en el tratamiento de aguas residuales y empiezan a interesarse en las aguas sintéticas y las purificadas. En el futuro podrían tratar de conquistar mercados en el sector de las bebidas gaseosas, cuyos “emperadores-guardianes” son Coca y Pepsi.”¹

Aguas Argentinas S.A.

Es un consorcio de empresas, liderado por la multinacional de capitales franceses y belgas denominada Suez Lyonnaise des Eaux, subsidiaria a su vez del mega grupo francés Vivendi. Forman también parte de este consorcio la Sociedad de Aguas de Barcelona, la Sociedad Comercial del Plata, y la Corporación Financiera Internacional (perteneciente al Grupo Banco Mundial).

Este consorcio empresario se encarga de la comercialización del agua potable y de las redes cloacales de la Capital Federal y de 17 partidos del Gran Buenos Aires, con presencia, además, en las provincias de Córdoba y Santa Fe; por un periodo concesionado de 30 años. Se trata entonces del “sistema de saneamiento unitario concesionado en régimen monopolístico más grande del

¹ Petrella, Ricardo. *La nueva “conquista del agua”*, en *Le Monde Diplomatique* Edición Cono Sur N° 10, abril 2000.

mundo: al momento de la privatización, la población total del área transferida ascendía a 8,6 millones de habitantes, de los cuales el 42% carecía del servicio de cloacas y el 30% de agua potable (...) la concesión fue adjudicada al consorcio liderado por Lyonnaise des Eaux-Dumez, que ofertó una reducción del 26,9% con respecto a la tarifa base. La concesión se otorgó a título gratuito, es decir sin pago de canon en concepto de explotación de la infraestructura preexistente, a pesar de que la tarifa proporciona una rentabilidad sobre estos activos transferidos como bienes de la concesión. La transferencia gratuita de los activos para su explotación privada por parte del consorcio se correspondía con la obligación empresarial de invertir alrededor de 1.300 millones de pesos e incorporar 1.331.000 habitantes al servicio de agua y 929.000 al servicio de cloacas en el primer quinquenio. Al final del período (1993-1998), el incumplimiento en materia de inversiones fue de 746,39 millones de pesos; los habitantes incorporados al servicio de desagües cloacales fueron solamente 112.000 y la población sumada al servicio de agua potable alcanzó apenas los 631.000 habitantes.”²

El contrato original exigía a la empresa inversiones que mantuvieran la calidad del servicio, las cuales para la primera década fueron incumplidas en un 58%. Sólo en el primer quinquenio, contra el compromiso de invertir aproximadamente 1.289 millones, se habían invertido poco más de 746 millones.

Respecto a la red cloacal, la cual se encuentra en estado crítico desde hace décadas en gran parte del área concesionada a Aguas Argentinas, el contrato estipulaba que, justamente por el estado de emergencia de dicha red, la empresa se comprometía en 5 años a realizar las inversiones pertinentes para solucionar la situación. Nada de ello ocurrió. Inclusive, la expansión de la red cloacal pactada en el contrato original sólo para el primer quinquenio (1993-1998) registraba incumplimientos en un 80%, ya que se había programado la extensión a 924.000 nuevos usuarios, y sólo habían accedido al servicio 112.000.

A esto se le suman diversidad de “desastres” ambientales y sociales: “la provisión de agua «potable» conteniendo arsénico, sustancias orgánicas volátiles y nitratos en niveles muy superiores a los permitidos (al tiempo que la presión de la provisión se ubica por debajo de la comprometida)”³ son ejemplo de ello.

Tarifas y ganancias

En cuanto a las tarifas, según el contrato original las mismas quedaban congeladas durante los primeros diez años de concesión. Sin embargo, en ese periodo, el alza fue del alrededor del 70%. Y esto no solo co-

mo resultado de la devaluación del peso ocurrida a comienzos de 2002. Antes de dicho momento, los incrementos tarifarios ya alcanzaban el 45% de las tarifas originales, mientras que el índice mayorista para el mismo periodo sólo se había incrementado en un 7,3%.

En este sentido, la empresa se comprometía a reducir las tarifas en función del incremento de las ganancias obtenidas. Sin embargo las mismas crecieron un 43% entre 1994 y 1998 con un incremento de usuarios del 20,7%, y siguieron aumentando hasta llegar a un 68% entre 1998 y 1999 con un aumento de usuarios del 31,5%.

De esta manera, las ganancias obtenidas superan con creces los promedios locales e internacionales. En informes elaborados por el Indec, se demuestra que “las ganancias de las empresas privatizadas (que se han constituido como monopolios regulados), superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por el resto de las 500 mayores empresas de la Argentina, que operan en régimen de competencia: sus tasas de rentabilidad sobre patrimonio neto (otra forma de medir las ganancias) promedian un 12,7%, comparado con el 4,9% de las demás (...) Un detalle poco conocido de los contratos de privatizaciones es que éstos permitieron el pago de “honorarios de administración” (management fee) a los operadores técnicos de las concesiones, que no son otros que las empresas multinacionales que controlan o encabezan los consorcios. Estos honorarios superan con creces cualquier pago razonable por un servicio técnico. Usualmente se contabilizan como parte de los “gastos de explotación” de las compañías (es decir que están exentos de impuestos). En otras palabras, se trata de ganancias encubiertas que se gran a las casas matrices eludiendo el pago del impuesto a las ganancias.

(...) El caso de Aguas Argentinas es similar: pagó 18 millones de dólares en 2000 a su casa matriz, Suez Lyonnaise Des Eaux, en concepto de honorarios por un “contrato de control de gestión y transferencia de tecnología” que firmó en 1993. Las ganancias de Aguas Argentinas parecen inmunes a la recesión. En 1998 ganó 36 millones de dólares, al año siguiente 62 y en 2000 tuvo un récord de ganancias de 85 millones (16,5% de las ventas, que sube al 20% si se consideran los “honorarios técnicos”).⁴

En el caso aquí analizado, Aguas Argentinas obtuvo en el periodo 1993-1999 un promedio de ganancias del 49%. Se calcula que aún si hubiese cumplido con el contrato, las ganancias hubiesen ascendido al 20% anual. En EE.UU., el nivel promedio de rentabilidad/ventas de las empresas de agua oscila entre 6% y 12%; en el Reino Unido, entre el 6% y 7%; en Francia, es del 6%.

² Bevillaqua, Nana. *Aguas Argentinas, gran negocio de la empresa, a expensas de los usuarios*, en Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur N° 24, agosto 2001.

³ Azpiazu, Daniel. *Los fabulosos “negocios” de las privatizadas*, en Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur N° 50, agosto 2003.

⁴ Maas, Pablo y Thwaites Rey, Mabel. *Privatizadas: ganancias al por mayor*, en Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur N° 32, febrero 2002.

Ponen todos

Observando algunos detalles, no es difícil entender como se llega rápidamente a los montos mencionados. Entre muchas otras cosas, Aguas Argentinas factura el 100% del consumo estimado por metro cuadrado, aún cuando el usuario no se conecta en todo el periodo al servicio. Es más, la empresa corta el servicio de agua potable y de cloacas domiciliarias por falta de pago, pero sigue facturando como si el consumo continuase normalmente. *“La empresa factura \$313 por sellar las cloacas por falta de pago y \$275 por la reconexión del servicio. En 1999 cortó el servicio de cloacas a 1.500 usuarios, de los cuales sólo se reconectó a 400, con absoluto desinterés por las exigencias de salubridad pública y contaminación de las napas. Por el “rubro” cortes del servicio de agua potable y cloacas AASA percibió en 1999 alrededor de 6 millones de pesos: en concepto de aviso de corte (20 pesos); corte con precinto (48 pesos); corte profundo (411 pesos) y corte de cloaca (588 pesos) aplicados a un total de 104.821 usuarios (incluidos los avisos de corte)”*.⁵

Pero aún hay más. En el año 1999, el contrato fue renegociado, mejorando las condiciones para la empresa: *“En términos tarifarios, el nuevo contrato mantiene la posibilidad de ajustar las tarifas en función de la variación de los costos o ingresos de la empresa, reduciendo a cero el riesgo empresario. Establece además un mecanismo de precio máximo, a través del cual se introduce la actualización de las tarifas por la variación de los precios de EE.UU., a pesar de la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Por último, incorpora la posibilidad de realizar revisiones ordinarias quinquenales, revi-*

*el cumplimiento de las metas y obras comprometidas en la oferta”*⁶.

Endeudamiento y default

Las empresas que participaron del proceso de privatización en Argentina recurrieron, en gran medida, al financiamiento externo para realizar la operación y posteriores inversiones. Esto se debió a las altas tasas de interés que tenían los créditos en nuestro país, en comparación con otros lugares del mundo, y a que al ser grandes empresas multinacionales, muchas veces los créditos los solicitaban a sus propias casas matrices, es decir, a sí mismas. En el caso de Aguas Argentinas, sólo el 10% de lo invertido provino de capital propio, siendo Suez Lyonnaise su principal prestadora.

“Desde el inicio de sus operaciones (mayo 1993), la empresa recurrió sistemáticamente al endeudamiento externo (en particular con el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el ING Baring y la Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial que, por otro lado, detenta el 5% de las tenencias accionarias de la empresa), a tasas de interés preferenciales del orden del 6/7% anual, de forma de minimizar su aporte de capitales propios. Ello, conjugado con los muy elevados márgenes de rentabilidad sobre patrimonio neto (por encima del 20%, cuando en el nivel internacional los márgenes usuales se ubican en torno al 6/8,5%) dio lugar, durante largos años, a un gran negocio financiero. Los incumplimientos en materia de inversión y de las metas de expansión del servicio concesionado fueron la contrapartida del mismo. Originalmente estaba previsto que el coeficiente endeudamiento/patrimonio neto no superara el 0,8. A fines del año 2000, tal relación alcanzó a 2,5 veces.

Hasta fines del año 2000, las remesas de utilidades ascendieron a casi 90 millones de dólares, al tiempo que las compras intracorporativas (que seguramente, sobrefacturación mediante, conllevaron el giro encubierto de recursos), se elevaron a más de 550 millones de dólares y el giro de divisas en concepto de management fee (gerenciamiento) superaba los 120 millones de dólares.

Por último, del cuadro de orígenes y aplicación de fondos de la empresa durante el período abarcado entre mayo de 1993 y diciembre de 2001 surge que los aportes de los socios se limitan a apenas el 3% del total del origen de los fondos y

*se trata, pura y exclusivamente, de los 120 millones de la garantía inicial prevista en el contrato.”*⁷



siones extraordinarias y revisiones por fuerza mayor o caso fortuito, suprimiendo lisa y llanamente el presupuesto de inalterabilidad de la tarifa para los primeros años de la concesión y

⁵ Bevillaqua, Nana. *Aguas Argentinas, gran negocio...*

⁶ Bevillaqua, Nana. *Aguas Argentinas, gran negocio...*

⁷ Azpiazu, Daniel. *Los fabulosos “negocios”...*

Esta rueda especulativa tuvo un punto de inflexión cuando se desató el default de la deuda externa argentina y la devaluación del peso respecto al dólar, a comienzos de 2002.

Desde entonces, las empresas privatizadas desataron una enorme presión para que se actualicen las tarifas, acercándose a los precios anteriores estipulados en dólares. En el caso de Aguas Argentinas, el pedido de aumentos llega al 60%. Uno de los motivos que se alegan para dicho pedido es el gran endeudamiento en el exterior de la empresa. “*Más de la mitad de la deuda externa de Aguas Argentinas (700 millones de dólares) es “blanda”, es decir a tasas bajas y plazos largos, y está tomada con organismos internacionales de crédito e inversión, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI).*

Normalmente, estos créditos, llamados de infraestructura, son considerados de bajo riesgo de repago. En el pasado, los organismos internacionales los entregaban a los gobiernos, pero gustosamente comenzaron a concederse a empresas privadas cuando el proceso de privatizaciones de los sistemas de aguas corrientes, electricidad y carreteras en los mercados emergentes comenzó a cobrar fuerza, a fines de la década de 1980.”⁸

Una de las formas que estas empresas tuvieron y tienen de presionar es a través del canje de la deuda iniciado por el gobierno argentino, activando en contra de la aceptación del mismo o poniendo como condición de aceptación por parte de los organismos como el FMI o el Banco Mundial que previamente se renegocien los contratos de las privatizadas. En algunos casos, como el de Aguas Argentinas, el interés de dichos organismos es directo. El Banco Mundial posee el 5% de Suez que, a su vez, es el principal accionista de Aguas Argentinas. El Banco Mundial presionó y lo sigue haciendo al gobierno argentino para que aumente las tarifas de los servicios privatizados, incluyendo por supuesto la de Aguas Argentinas.

La impotente burguesía local: control sin estatización

La burguesía local dueña del capital más concentrado a nivel nacional es consciente de su incapacidad para controlar con exclusividad la producción y distribución del petróleo, del gas, del agua a nivel nacional, entre otros recursos estratégicos y necesarios; en manos de verdaderos “gigantes” a nivel mundial de la talla de Coca, Vivendi, Nestlé (en el caso del agua) o Exxon, Shell, Repsol (en el del petróleo). Sabiéndose, repetimos, incapaces para la conducción en esta asignatura, el capital local cedió la gestión y control (concesión) de dichas ramas al mayor capital europeo y norteamericano. Cesión de la cual sacó una coyuntu-

ral y sustanciosa tajada: los grupos locales más importantes participaron activamente en el negocio de las privatizaciones vendiendo “barato” lo que el gobierno del Estado les había prácticamente “regalado”. Pero una vez hecho el negocio la oportuna burguesía local comenzó a cargar las tintas contra las empresas privatizadas a medida que la recesión se profundizaba y sus costos fundamentales en materia de servicios, aumentaban. Como hemos visto, la tasa de rentabilidad de las compañías privatizadas superó la media de las empresas instaladas en el país. Esta circunstancia sirvió de argumento a la Unión Industrial -con explícito apoyo de las Pymes nucleadas en la CAME- para exigir en marzo de 1998 al gobierno de Carlos Menem, la descarga del aumento impositivo en ciernes (contenido en la reforma impositiva diagramada por el entonces ministro de Economía, Roque Fernández,) sobre las concesionarias de los servicios públicos. Los dirigentes de la UIA alegaban “ganancias extraordinarias” a favor de las privatizadas durante toda la década.

Siete años después, la burguesía local intenta (según un marco de posibilidad objetivo) sólo intervenir mínimamente en el control de las tarifas y la distribución de los servicios, cuidándose de no despertar al animal reestatizador. Adherente a toda renegociación con las privatizadas, exige al gobierno la garantía de que el Estado no se cargará con el manejo absoluto de ninguna de las ramas privatizadas. De esta manera, Cristiano Rattazzi de Fiat aseveró “*es un absurdo, anti-histórico, ir en contra de la historia. Estatizar el servicio de aguas sería un error grave para el futuro de la Argentina, y olvidarse de lo mal que funcionaba antes. El mundo va a sistemas eficientes y privatizados en todos los sectores*” (LN 25/1). En idéntica línea se explayó el editorialista de La Nación, bajo el título *Reestatizar sería un grave error*: “*Resultan sumamente preocupantes los trascendidos que indican que el grupo francés que controla Aguas Argentinas estaría evaluando irse del país, al igual que las versiones según las cuales el propio presidente de Francia habría admitido esa posibilidad (...) Hubo privatizaciones bien y mal hechos, incluso algún fracaso. También ha habido casos de corrupción (...) Pero estas circunstancias no alcanzan para neutralizar el resultado ampliamente positivo que tuvo la transferencia de las empresas públicas al sector privado y lo grave y costoso que sería revertir ese proceso*”. (LN 23/1).

Habiéndose anulado la concesión del correo, del espacio radioeléctrico, de alguna línea del ferrocarril; recuperado una aerolínea de escala nacional; aunque lejanamente creíbles, las amenazas del gobierno sobre el consorcio que controla Aguas, no dejan de causar profundas desconfianzas, tal y como vimos, en la burguesía local más concentrada.

⁸ Maas, Pablo. *Default de las multinacionales*, en Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur N° 35, mayo 2002.

Coyuntura política

Tras el intercambio de golpes, “duhaldismo” y “felipismo” se distancian para medirse.

Enero nos dejó apenas un nuevo capítulo en la disputa por el poder en la provincia de Buenos Aires, la más importante en términos políticos y económicos.

Luego del intercambio de golpes que se propinaron “duhaldistas” y “felipistas” durante el mes de diciembre, enero continuó con similar intensidad, pero con el transcurrir de los días las aguas bonaerenses fueron aquietándose, manteniendo, sin embargo, la disputa en estado latente.

Luego de que el duhaldismo, utilizando el control del poder legislativo provincial, aprobara el 29 de diciembre de 2004 un presupuesto para el año entrante, quitándole al gobernador Solá herramientas habituales de modificación del mismo, la respuesta desde el ejecutivo provincial llegó el 17 de enero. Ese día, Solá vetó el presupuesto aprobado en el Senado y en Diputados, aduciendo que se estaba atacando la gobernabilidad. Las acusaciones hacia el duhaldismo fueron explícitas, intentando mostrar fortaleza del lado del gobernador. Solá, señalaba al respecto: “*No voy a*

hacer de payaso. No voy a hacer payasadas, como promulgar el presupuesto y enviar después tres, cuatro o cinco mil leyes, porque eso sería bastardear a las instituciones” (LN 18/01).

Ese fue, al menos durante este round, el último intercambio de golpes. A partir de allí, ambas facciones se mostraron conformes con las demostraciones de fuerza respectivas, y decidieron bajar el tono de la disputa. Influyó, en ese sentido, el viaje del presidente Kirchner a Francia, quien llevó dentro de su comitiva al propio gobernador Solá y al presidente del PJ bonaerense, José María Díaz Bancalari, brazo derecho del ex presidente Duhalde. A partir de entonces, la disputa por el control de la provincia de Buenos Aires quedó latente, y los contrincantes tomaron distancia de la lucha cuerpo a cuerpo, para medirse con mayor precisión y sacar conclusiones del último intercambio de puñetazos.

A medida que se acercan las elecciones legislativas previstas para octubre de este año, la disputa tenderá a incrementar su intensidad. Previamente, habrá que definir candidatos, y será entonces cuando la interna del PJ muestre a sus facciones enfrentándose abiertamente.

Conflicto social

Los principales acontecimientos registrados en el mes de diciembre fueron: 2 jornadas de huelgas parciales; 8 jornadas de marchas y actos; 2 jornadas de concentraciones frente a edificios públicos.

Las organizaciones y agrupamientos que protagonizaron las jornadas fueron: familiares y amigos autoconvocados de las víctimas de República de Cromagnon (5); partidos de izquierda (5); trabajadores de Aerolíneas y Austral nucleados en Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, Unión del Personal Superior de

Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes y los técnicos y mecánicos de las dos compañías (2); Quebracho (1); Bloque Piquetero (1).

Entre las principales demandas y consignas observamos: castigo a los responsables de la tragedia de Cromagnon (5); repudio a la “corrupción” (5); libertad y desprocesamiento de manifestantes y/o militantes (2); trabajo genuino (1); aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales.